



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2016-3232277-APN-DDYME#JGM- RESOL JGM: DESESTIMA RECURSO TORRES ABAD

VISTO el Expediente N° EX-2016-3232277-APN-DDYME#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 T.O. 2017 y la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° RESOL-2016-166-E-APN-JGM del 21 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita una presentación, interpuesta por la señora Da. Carmen TORRES ABAD (D.N.I. N° 93.980.381) por la cual cuestiona por arbitraria la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° RESOL-2016-166-E-APN-JGM del 21 de julio de 2016 y solicita se impida el uso de la información que sobre su persona consta en la base de datos de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y a la cual tiene acceso la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA dependiente de esta Jurisdicción, para finalidades distintas a aquellas que motivaron su obtención.

Que mediante la citada resolución se aprobó el Convenio Marco de Cooperación entre la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS mediante el cual se establece el marco técnico jurídico para el intercambio electrónico de información entre las partes firmantes, contenida en sus bases de datos consolidadas.

Que la pretensión de la reclamante se fundamenta en reparos efectuados sobre dicho Convenio Marco cuestionando la falta de consentimiento de los titulares de los datos personales afectados, así como la utilización de esos datos para fines diferentes.

Que en consecuencia considera que la resolución reprochada resulta una medida injustificada, arbitraria e irrazonable y que afecta al derecho a la intimidad.

Que la firma del Convenio Marco precitado y la resolución que lo aprobara, tramitaron por el Expediente CUDAP:EXP-JGM:0007664/2016 del Registro de esta Jefatura, en el cual se incorporaron los antecedentes

técnicos de hecho y de derecho que avalaron el dictado de la medida, los que en su conjunto expresan de manera concreta las razones que indujeron a su emisión, constituyendo motivación suficiente de los mismo entre ellos la Nota N° 980/16 emitida por el Director Nacional de Protección de Datos Personales del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el Dictamen IF-2016-00312267-APN-DGAJ#JGM de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de esta Jefatura, que avalaron el dictado de la medida.

Que se observa que el Convenio Marco en cuestión importó una manifestación de voluntad entre un órgano administrativo y una entidad descentralizada de la Administración Pública Nacional, en ejercicio de facultades propias.

Que de su objeto deriva el carácter de colaboración o cooperación del documento, en cuyo marco las partes se obligaron a realizar acciones tendientes al cumplimiento de sus funciones específicas.

Que en razón de lo expuesto, no se advierte en qué medida las disposiciones contenidas en el citado Convenio han incidido, alterado o modificado la situación jurídica del titular de los datos que se pretende intercambiar, del mismo modo que no se evidencia una amenaza concreta a su derecho de intimidad.

Que se trata de datos que ya se encontraban registrados en una entidad pública, y que serán utilizados para mantener informada a la población y para identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, que permita incorporar la diversidad de la opinión pública, según lo acordado en la CLÁUSULA PRIMERA del Convenio citado.

Que el Convenio Marco no incluye en sus alcances a los “datos sensibles”, de acuerdo a lo acordado en su CLÁUSULA SEGUNDA.

Que, en la CLÁUSULA SÉPTIMA del citado Convenio Marco se precisa que los datos a ceder se corresponden a las necesidades del ejercicio de las competencias de las partes y serán intercambiadas con la exclusiva finalidad y dentro del estricto cumplimiento de sus competencias y conforme las exigencias de la Ley N° 25.326 a la vez que se acuerda, mediante la CLÁUSULA OCTAVA, mantener una estricta confidencialidad y hacer respetar este deber por todos los dependientes que designen al efecto.

Que en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9° de la mencionada Ley, las CLAUSULAS DECIMO PRIMERA Y DECIMO SEGUNDA del convenio en cuestión, han contemplado todos los resguardos necesarios para la seguridad de los datos involucrados, el uso legítimo de tales datos y la eventual responsabilidad sí, por alguna circunstancia, se hiciere uso indebido de ellos o se vulnerara en alguna medida la normativa vigente, habiendo merecido dictamen favorable de la Dirección de Protección de Datos Personales del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326.

Que respecto al alegado consentimiento que la titular de los datos personales debería haber otorgado, la citada ley determina en su artículo 11, apartado 3, inciso c) que : “El consentimiento no es exigido cuando: ... c) se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias...” , supuesto aplicable al convenio cuestionado.

Que el objeto del acuerdo no resulta incompatible con la finalidad que originó la obtención de los datos en cuestión, de conformidad a lo establecido en el artículo 4°, inciso 3 de la Ley citada.

Que por ello, tanto el convenio como la resolución aprobatoria resultan razonables y ajustados a derecho, en tanto importaron la adopción de medidas proporcionalmente adecuadas a la finalidad que se tuvo en miras para su dictado y al marco normativo aplicable.

Que, en relación al reclamo efectuado concretamente sobre la divulgación del número telefónico vale señalar que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) mediante la

Resolución N° 230 /2007 aprobó una política de clasificación de datos sobre la base que administra a fin de preservar los datos sensibles contemplando las categorías de : a) Datos Sensibles, b) Datos No Sensibles; c) Datos Públicos; d) Datos No Públicos, el número de teléfono no resulta un dato no público y mediante la Resolución de la DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) N°48/14 aprueba en su artículo 1° la clasificación de datos mencionada que como Anexo, la integra. De dicho Anexo surge que el número telefónico se encuentra clasificado como dato no sensible.

Que la Ley N° 25.326 define a los “datos sensibles” como aquellos referidos a información que revele origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual. En este orden de ideas, el número de teléfono es un dato no sensible, concretamente un dato de contacto y no está amparado por el tratamiento como dato sensible.

Que la pretensión de la reclamante no cuadra en los supuestos contemplados por el artículo 33 de la Ley N° 25.326.

Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el reclamo interpuesto por la señora TORRES ABAD por carecer de sustento alguno en el marco legal referenciado.

Que mediante los dictámenes IF-2017-00822917-APN-DGAJ#JGM e IF-2018-01101714-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de esta Jefatura ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 30 y 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y sus modificatorias.

Por ello

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desestímase el reclamo administrativo articulado por la señora Da. Carmen TORRES ABAD. (D.N.I. 93.980.381) por las razones expuestas en los párrafos del considerando de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber que lo resuelto agota la instancia administrativa en los términos del artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.